

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

DEMANDANTE	GUSTAVO ADOLFO CASTRO PASSOS
DEMANDADO	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
RADICADO	05001-31-05-018-2015-01355-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
DECISIÓN	IMPARTE APROBACIÓN A TRANSACCIÓN Y DA POR TERMINADO EL PROCESO

Medellín, veinticuatro (24) de enero de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, y MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, como ponente, proceden a resolver la solicitud tendiente a que se imparta aprobación al acuerdo transaccional celebrado entre las partes.

I. – ANTECEDENTES.

Mediante el presente proceso ordinario laboral, la parte demandante pretende lo siguiente:

- a). Su despacho declarará que los contratos de trabajo autogestionario (contrato o convenio de asociación o empleado en misión) suscritos entre el demandante y las Cooperativas y las empresas temporales, están viciados de nulidad por carencia absoluta de causa y objeto, además de vicio en el consentimiento.*
- b). Como consecuencia de la declaración anterior, se declara por su despacho que entre el demandante y la empresa demandada, existió un solo contrato de naturaleza laboral, el cual tuvo una vigencia entre el 5 de Abril de 1994 y el 5 de Marzo de 2015, fecha en la cual fue despedido injustamente.*

c). Como consecuencia de lo anterior, se condenará a la demandada a reconocer y pagar al demandante el reajuste de la indemnización por despido injusto debidamente indexada, teniendo en cuenta todo el tiempo real y efectivamente laborado.

d). Costas del proceso.

En su réplica (fls. 171 al 180 del archivo PDF N° 01), la parte demandada negó la existencia de una relación laboral con el señor GUSTAVO ADOLFO CASTRO PASSOS previa al 28 de febrero de 2008, y se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones formuladas, proponiendo en su defensa las excepciones de mérito que denominó: *“PRESCRIPCIÓN; INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN; PAGO; e INDEBIDA INTEGRACIÓN DEL LITIS CONSORCIO POR PASIVA”*.

En audiencia pública de trámite y juzgamiento celebrada el 20 de mayo de 2022 (archivo PDF N° 21), el JUZGADO DIECIOCHO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, DECLARÓ que entre el demandante GUSTAVO ADOLFO CASTRO PASSOS y la demandada SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 5 de abril de 1994 hasta el 5 de marzo de 2015, en donde fungieron como simples intermediarias las entidades RAPI ENTREGA, UNO A SERVICIOS ESPECIALES, MANPOWER DE COLOMBIA LTDA, COOPERATIVA DE TRABAJO GESTIONAR, ACCIÓN PLUS y SODEXO COLOMBIA S.A.

En consecuencia, CONDENÓ a SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A a reconocer y pagar al demandante GUSTAVO ADOLFO CASTRO PASSOS la suma de \$56.478.275 por concepto de reajuste de la indemnización por despido sin justa causa consagrada en el numeral D de la Convención Colectiva vigente para los años 2013 -2017, suma que deberá ser indexada.

De otro lado, DECLARÓ no probada la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, propuesta por la demandada, y finalmente impuso las costas del proceso en la primera instancia a cargo de la sociedad SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., y a favor del señor GUSTAVO ADOLFO CASTRO PASSOS, fijando como agencias en derecho la suma de \$3.953.479.

Contra dicha decisión la parte demandada interpuso recurso de apelación el cual fue admitido por la magistrada ponente, y ya estando vencido el traslado para alegaciones, los apoderados de ambas partes presentaron en conjunto un documento denominado “TRANSACCION”, en el que se estipuló lo siguiente:

III. TRANSACCIÓN

El demandante **GUSTAVO CASTRO PASSOS y SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.**, acuerdan transigir todas y cada una de las pretensiones de la demanda formulada por el primero a la segunda, en la suma de **OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M.L. (\$82.600.000)**

La suma antes indicada se pagará mediante transferencia electrónica a la cuenta de ahorros del Banco Davivienda número 488433263610 a nombre del demandante **GUSTAVO CASTRO PASSOS**, a los quince (15) días hábiles siguientes a la firma del presente documento y la remisión de la certificación bancaria, cédula de ciudadanía y RUT.

La suma de **OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M.L. (\$82.600.000)** cubre la totalidad de las pretensiones económicas de **GUSTAVO CASTRO PASSOS**.

El demandante **GUSTAVO CASTRO PASSOS y SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.** se declaran mutua, definitiva y recíprocamente a paz y salvo por todo concepto que se derive de los hechos y pretensiones de la demanda, y le dan a este acuerdo el alcance de una transacción con efectos de cosa juzgada en última instancia, de conformidad con el artículo 2483 del Código Civil.

El demandante **GUSTAVO CASTRO PASSOS y SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.** renuncian de manera recíproca a cualquier reclamación judicial o extrajudicial respecto de los hechos y pretensiones que dieron lugar al proceso identificado en la referencia y específicamente renuncian a reclamaciones por condenas en costas en el mismo, por lo cual se solicitará expresamente al despacho no condenar en costas a ninguna de **LAS PARTES**.

El presente documento consigna el arreglo total de las controversias existentes entre quienes lo suscriben. Por lo tanto, se entiende que las contraprestaciones recibidas por cada parte son únicas y cubren cualquier concepto reclamado o alegado, en la actualidad o en el futuro.

Manifestamos mediante el presente instrumento que es nuestra voluntad que el proceso ordinario laboral que se tramita ante el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín bajo el radicado Nro. 05001310501820150135500 se termine y se proceda con el archivo del mismo.

Como constancia de aceptación y conformidad con la transacción contenida en este instrumento, firman las partes contratantes involucradas en este acto, en dos ejemplares del mismo tenor y contenido, uno para cada parte, en la ciudad de Medellín, el día __ de diciembre de 2022 y autentican sus firmas.

II. CONSIDERACIONES

Para resolver, resulta necesario traer a colación la figura jurídica de la transacción, como mecanismo o forma de terminación anormal del proceso dentro del trámite del recurso de apelación, esta figura tiene expresa definición legal en el art. 2.469 del Código Civil, normativa sustancial según la cual, “...*La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual...*” dejando en claro dicha disposición legal que “...*No es transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa...*”

En cuanto a su trámite, debe recordarse que este se encuentra regulado en el art. 312 del Código General del Proceso, aplicable en materia laboral y seguridad social en virtud del art. 145 del CPTSS, veamos:

“ARTÍCULO 312. TRÁMITE. *En cualquier estado del proceso podrán las partes transigir la litis. También podrán transigir las diferencias que surjan con ocasión del cumplimiento de la sentencia.*

Para que la transacción produzca efectos procesales deberá solicitarse por quienes la hayan celebrado, dirigida al juez o tribunal que conozca del proceso o de la respectiva actuación posterior a este, según fuere el caso, precisando sus alcances o acompañando el documento que la contenga. Dicha solicitud podrá presentarla también cualquiera de las partes, acompañando el documento de transacción; en este caso se dará traslado del escrito a las otras partes por tres (3) días.

El juez aceptará la transacción que se ajuste al derecho sustancial y declarará terminado el proceso, si se celebró por todas las partes y versa sobre la totalidad de las cuestiones debatidas o sobre las condenas impuestas en la sentencia. Si la transacción solo recae sobre parte del litigio o de la actuación posterior a la sentencia, el proceso o la actuación posterior a este continuará respecto de las personas o los aspectos no comprendidos en aquella, lo cual deberá precisar el juez en el auto que admita la transacción. El auto que resuelva sobre la transacción parcial es apelable en el efecto diferido, y el que resuelva sobre la transacción total lo será en el efecto suspensivo.

Cuando el proceso termine por transacción o esta sea parcial, no habrá lugar a costas, salvo que las partes convengan otra cosa.

Si la transacción requiere licencia y aprobación judicial, el mismo juez que conoce del proceso resolverá sobre estas; si para ello se

requieren pruebas que no obren en el expediente, el juez las decretará de oficio o a solicitud de parte y para practicarlas señalará fecha y hora para audiencia.”

Por otra parte, de vieja data se ha considerado que la transacción entre empleador y trabajador o entre una administradora de pensiones y un afiliado o beneficiario, no puede implicar una renuncia de los derechos ciertos; luego es necesario en cada caso analizar si se están desconociendo derechos indiscutibles, como quiera que la ley no puede aplicarse de manera absolutamente rígida, hasta el punto de declarar que toda transacción celebrada en relación con los derechos que el trabajador cree tener sea nula, y que ella envuelve en todo caso una renuncia parcial de sus derechos. Porque si se llega a esta conclusión, ningún acuerdo sería posible, teniendo como consecuencia que aun los derechos indiscutibles del trabajador u afiliado no se pudieran pagar directamente por virtud de arreglo.

En providencia del 18 de diciembre de 1947, publicada en la Gaceta del Trabajo, Tomo II, página 550, el Tribunal Supremo del Trabajo expreso:

“...forzoso es para el fallador examinar en cada caso si el arreglo o transacción respectivo es de aquellos que implican necesariamente una evidente renuncia de los derechos del trabajador que se hallan amparados por la ley. Esto, desde luego, partiendo de la base de que la ley no puede aplicarse de una manera absolutamente rígida hasta el punto de declarar que toda transacción celebrada en relación con los derechos que el trabajador cree tener es nula, en cuanto a servicios ya prestados y que ella envuelve en todo caso una renuncia parcial de sus derechos.

Porque si se llega a esta conclusión, ningún acuerdo será posible entre patronos y trabajadores y todas las prestaciones sociales, aún las más claras e indiscutibles, no podrán pagarse directamente, por virtud de arreglo, porque el litigio quedaría pendiente a pesar de la declaración que se hiciera de que están satisfechas las prestaciones del trabajador, y habría que acudir en todo caso ante las autoridades judiciales, para que por su intermedio se propiciasen los arreglos o se admitiera como válido el pago que se hiciera...”

Siguiendo con lo anterior, se tiene que un derecho es cierto e indiscutible, en la medida en que no exista dubitación alguna sobre la existencia de los hechos que le dan origen y exista certeza de que no hay ningún elemento que

impida su configuración o su exigibilidad. En providencia CSJ AL, 14 dic. 2007, rad. 29.332, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, estimó:

“...el carácter de cierto e indiscutible de un derecho laboral, que impide que sea materia de una transacción o de una conciliación, surge del cumplimiento de los supuestos de hecho o de las condiciones establecidas en la norma jurídica que lo consagra. Por lo tanto, un derecho será cierto, real, innegable, cuando no haya duda sobre la existencia de los hechos que le dan origen y exista certeza de que no hay ningún elemento que impida su configuración o su exigibilidad. Lo que hace, entonces, que un derecho sea indiscutible es la certeza sobre la realización de las condiciones para su causación y no el hecho de que entre empleador y trabajador existan discusiones, diferencias o posiciones enfrentadas en torno a su nacimiento, pues, de no ser así, bastaría que el empleador, o a quien se le atribuya esa calidad, niegue o debata la existencia de un derecho para que éste se entienda discutible, lo que desde luego no se correspondería con el objetivo de la restricción, impuesta tanto por el constituyente de 1991 como por el legislador, a la facultad del trabajador de disponer de los derechos causados en su favor; limitación que tiene fundamento en la irrenunciabilidad de los derechos laborales consagrados en las leyes sociales....”

Sobre el tema, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en el Auto AL1761-2020, Radicado N° 75.825, del 15 de julio de 2020, precisó:

“...la Sala considera necesario destacar que existen unos presupuestos cuyo cumplimiento es indispensable para que proceda la aprobación de la transacción, esto es, que: (i) exista entre las partes un derecho litigioso eventual o pendiente de resolver; (ii) el objeto a negociar no tenga el carácter de un derecho cierto e indiscutible; (iii) el acto jurídico sea producto de la voluntad libre de las partes, es decir, exenta de cualquier vicio del consentimiento, y (iv) lo acordado genere concesiones recíprocas y mutuas para las partes (CSJ AL607-2017), o no sea abusiva o lesiva de los derechos del trabajador...”

Teniendo en cuenta lo expresado, la Sala observa en el presente caso que las partes, buscan a través de sus apoderados, la aprobación de la transacción y con ella, la terminación y archivo del proceso, para lo cual, el objeto de este, que lo fue el reajuste de una indemnización convencional por despido injusto debidamente indexada, se soluciona por el mencionado acuerdo privado, imponiéndose unas obligaciones económicas a cargo de la parte demandada SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., derechos que, por demás, son inciertos y discutibles, existiendo concesiones recíprocas entre

las partes, y tampoco se advierten vicios de consentimiento, cumpliéndose así con los presupuestos señalados por la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia para que proceda la aprobación de la transacción.

En consecuencia, no encuentra obstáculo esta Colegiatura para impartirle aprobación a la transacción, en lo atinente a este proceso judicial identificado con el radicado único nacional 05001-31-05-018-2015-01355-00.

En ese orden de ideas, se acepta la transacción presentada por ambas partes y se da por terminado el proceso sin lugar a costas, en aplicación del artículo 312 del Código General del Proceso aplicable a los juicios del trabajo por remisión analógica permitida por el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, se advierte que la transacción fue suscrita por las partes y sus apoderados judiciales, además la representante legal de la sociedad accionada Dra. Ana Cristina Gaviria Gómez, se encuentra expresamente facultada para “transigir”, según se desprende del certificado visible a folios 3 al 7 del archivo PDF N° 13

Teniendo en cuenta la naturaleza de la decisión proferida y lo acordado libremente por las mismas partes, no habrá lugar a imponer costas procesales en las instancias.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL,**

RESUELVE:

PRIMERO: IMPARTIR APROBACIÓN a la transacción suscrita por el señor GUSTAVO ADOLFO CASTRO PASSOS identificado con la cédula de ciudadanía N° 71.651.412 y la sociedad SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., sobre la totalidad del litigio, en los términos señalados en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR la terminación del proceso ordinario laboral identificado con el radicado único nacional 05001-31-05-018-2015-01355-00.

TERCERO: SIN COSTAS en ambas instancias.

CUARTO: Se ordena la notificación por **ESTADOS** de lo resuelto y se ordena devolver el expediente al Juzgado de origen para que proceda con su archivo definitivo.

Los magistrados



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 011 del **26 de enero de 2023**.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>.